

de 1.400 campamentos que albergan a cerca de 120.000 familias -según datos de Techo Chile- y un déficit estimado entre 500 mil y 1 millón de viviendas, enfrentamos una emergencia estructural que exige atención inmediata.

El aumento sostenido de las tomas refleja las dificultades de acceso a la vivienda formal de miles de familias. A ello se suma la mayor frecuencia de incendios forestales, que deja cada año a miles de personas sin hogar.

En este contexto, el enfoque gubernamental de desalojos, aunque necesario, debe ir acompañado de medidas que eviten que la crisis se desplace sin resolverse.

La meta de construir 400.000 viviendas sociales en cuatro años es loable, pero se ve amenazada por restricciones presupuestarias que limitan su alcance.

El Gobierno debe adoptar una estrategia integral que reconozca la vivienda como derecho humano. Esto implica acelerar la construcción de viviendas sociales y regular para que los beneficios lleguen a quienes más los necesitan. De lo contrario, las soluciones informales -como las megatomas- seguirán consolidándose como respuesta a una política habitacional insuficiente.

*Víctor Yáñez Pereira, académico de la Universidad Autónoma de Chile*